

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Durante el mes de junio han tenido lugar varios acontecimientos de importancia. En el orden político, se ha observado un proceso de deterioro de la situación política que afecta no solo a la coalición de gobierno, sino al propio PDL.

Es evidente que la decisión adoptada por el gobierno y anunciada por el propio presidente Basescu de proceder a duros recortes del gasto presupuestario a fin de no sobrepasar el déficit acordado con el Fondo Monetario Internacional, ha acabado por pasar factura. Por primera vez desde que en 2004, el Presidente Basescu rompiera el monopolio político socialdemócrata, su popularidad y la de su partido ha descendido significativamente. Esto ha creado tensiones en el seno del propio partido, por una parte, y en el de la coalición de gobierno, formada con el partido de la minoría húngara y los independientes, por otra.

Por lo que respecta al PDL, los “notables” reunidos informalmente en la localidad de Snagov, próxima a Bucarest, a principios de junio acordaron, no sin mostrar primero sus profundas discrepancias, posponer una crisis de gobierno hasta después del verano y una renovación de los cuadros dirigentes del partido para más adelante. Si algo se vio en esa reunión es que el partido ha perdido su tradicional cohesión y que sólo el aún incontestado liderazgo de Basescu parece mantenerlo unido. Por una lado, la “vieja guardia” formada por los ministros Blaga, Videanu y Berceanu, titulares de las carteras de Interior, Economía y Transportes, respectivamente, ha sido “puesta en la picota”, aunque conservan buena parte de su influencia, como lo demuestran sus repetidas controversias con el primer ministro Boc. Otras voces emergentes, como la de los ministros Funeriu (Educación) Baconschi (Exteriores) y Udrea (Desarrollo rural y Turismo) comienzan a destacar como referencia de posiciones discrepantes. En cualquier caso, el gobierno parece haber perdido la iniciativa, su popularidad ha descendido un 10% y los rumores de crisis no hacen sino aplazar la necesidad de un cambio, capaz de contrarrestar la visión que de él tiene buena parte de la opinión pública, que empieza a percibirlo como inmaduro, oscilante y sin una visión clara.

Varios son los sucesos que están ayudando a crear dicha imagen. Por una parte, la ineficacia al prever las posibilidades de llevar adelante su política de austeridad. En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad de una de las medidas más importantes, el recorte de un 15% de las rentas de las pensiones de casi seis millones de pensionistas, tras ser presentada como una necesidad imposible de soslayar para poder nivelar la situación presupuestaria, ha arrojado una sombra de duda sobre la eficacia y seriedad de los cálculos del gobierno.

Pero si el anuncio del recorte de las pensiones ha provocado movilizaciones sin precedentes y deteriorado la imagen del gobierno y comprometido seriamente la del Jefe del Estado (el diario Adevarul ha calculado la

pérdida de popularidad de Basescu en un 20% que podría por lo tanto haberse evitado) la decisión de incrementar el IVA en 5 puntos, ha caído como un jarro de agua fría en los sectores que hasta ahora habían confiado en un inicio de la recuperación a partir del segundo semestre del 2010. Volveremos sobre esto más adelante.

La opinión comienza a percibir un gobierno sumido en la incoherencia, en que los ministros prefieren confesarse ante los medios de comunicación que en las reuniones de gabinete, exclusivamente preocupado por no perder el resto del préstamo del FMI (en lo que cada vez parece más una huida hacia delante) que sentarse sosegadamente a hacer un análisis realista de la situación y tomar medidas a medio y largo plazo. Y no es que no haya diseñado algunas de éstas, sino que la situación inmediata parece ahogar cualquier posibilidad de que puedan llegar algún día a dar fruto.

Las disputas entre unos y otros ministros se ventilan asimismo en público, en lugar de reservarse al secreto de las deliberaciones del gabinete, y a un conflicto entre Vasile Blaga y Elena Udrea se sucede otro entre el independiente Gabriel Oprea (Defensa) y Sebastián Vlădescu (Finanzas) sobre pensiones militares. A unas declaraciones de Blaga en TV, inclinándose por la necesidad de un nuevo acuerdo con el FMI (y un nuevo préstamo) se suceden casi al mismo tiempo la discrepante de Radu Berceanu (Transportes) y posteriormente la de Adrian Videanu (Economía) quien, para completar el cuadro afirma el mismo día: “Un nuevo acuerdo con el FMI sería bienvenido”.

Finalmente, la decisión adoptada a toda velocidad de incrementar el IVA en 5 puntos parece haber sumido al ejecutivo y al propio partido en el desconcierto. Si bien ha tenido la virtud de despejar las dudas en el seno del Board del FMI, que ha ordenado el pago inmediato de la quinta remesa del préstamo, consistente en 900 millones de euros, ha provocado las críticas de todos los sectores, incluida la del propio Presidente Basescu. Por primera vez en esta ocasión, éste no ha dudado en desmarcarse públicamente del ejecutivo.

El muy leal primer ministro parece no haber acertado esta vez, aunque poca cosa podía hacer en contra, vista la situación. Aún así, su relativa longevidad, que depende estrictamente del crédito ofrecido por su mentor, se ha visto así violentamente avocada al entredicho. Es evidente que el partido necesita más que nunca reinventarse a sí mismo, con un Traian Basescu por primera vez, al margen, intentando inútilmente conciliar voluntades y minimizar discrepancias.

Sin embargo, los medios coinciden en observar que si Basescu decide prescindir de la vieja guardia, ¿Quién sería capaz de reemplazar a aquella? Porque al haber transformado el PDL en un partido presidencial, quintaesencia del anhelado régimen presidencialista, la rebelión de los “jóvenes turcos” no se haría tanto contra “los padres” como contra “el abuelo hiper protector”.

La situación del gobierno puede tornarse aún más angustiosa si cabe, en caso de prosperar la tesis del presidente del Senado y antiguo líder del PSD, Mircea Geoana, quien ha enviado el decreto aprobando el incremento del IVA al Ombudman para que éste intervenga ante el Tribunal Constitucional y que sea

anulado. Geona, coincide con empresarios y sindicatos en señalar que no es posible alterar el Código Fiscal sino es por medio de una medida legislativa aprobada en el Parlamento, y que incluso en ese caso, la reforma no podría entrar en vigor, por estipularlo así el propio Código, sino al menos seis meses después de su promulgación.

Esto quiere decir que, aun aprobándose, no podría en cualquier caso entrar en vigor el 1 de julio, como ha decretado y quiere el gobierno. Semejante retraso volvería sin embargo inservible dicha medida para lo que quiere el gobierno, es decir, cumplir el objetivo de déficit máximo en el porcentaje pactado con el FMI.

Otras situaciones están ayudando a crispar las relaciones no ya en el propio PDL, sino también entre los otros miembros de la coalición. Entre éstas, cabe destacar la revisión del estatuto de la Agencia Nacional de Integridad (ANI). Considerada por la Comisión Europea y por gran parte de la opinión pública internacional como el mayor garante de la lucha contra la corrupción, esta institución entró en crisis cuando hace dos meses, una decisión del Tribunal Constitucional anuló una parte sustancialmente significativa de sus atribuciones al declarar inconstitucionales varios relevantes artículos de su reglamento.

No tardaron en alzarse voces diversas señalando la importancia de mantener un perfil competencial alto en la ANI, tanto por arte de la Comisión Europea como de algunos representantes diplomáticos (netamente, el Embajador EEUU. Mark Gitenstein). El portavoz de la Comisión, Mark Gray, señaló que la retirada de competencias a la ANI podría incluso poner en entredicho el compromiso de lucha contra la corrupción adquirido por Rumanía, que fue uno de los condicionamientos para la adhesión a la U.E. En cualquier caso, la nueva situación quedaría reflejada en el informe de la Comisión previsto para finales de julio que, por primera vez se anuncia más crítico con Rumanía que con Bulgaria.

Consciente de la necesidad de ofrecer una imagen del país comprometido con la convergencia con Europa en materia de democratización en los ámbitos deficitarios de Justicia y de lucha contra la corrupción, el Presidente Basescu remitió al Parlamento unas líneas maestras que en su opinión debería recoger el nuevo proyecto de reglamento de la ANI, para que mantuviese lo esencial de sus competencias, salvados los puntos de conflicto señalados por el Constitucional. Si bien la Cámara de Diputados aceptó la opinión presidencial y despachó el proyecto en un tiempo record, el Senado decidió hacer caso omiso de aquella, adoptando por el contrario el dictamen del Comité de Asuntos Jurídicos que preside el senador por el partido de la minoría húngara (UMDH) G.Frunda. Basescu reaccionó inmediatamente acusando a Frunda de haber obrado por intereses personales, a lo que el aludido respondió señalando que el texto del Comité fue aprobado por la casi unanimidad del 115 senadores más unas pocas abstenciones, pero ningún voto negativo. El ataque presidencial ha evidenciado, no obstante, que no van del todo bien las relaciones entre los socios de coalición.

En definitiva, parece que tan sólo las crecientes disensiones entre los poco avenidos PL y PSD, instalados en la oposición, relativas a una hipotética fase de transición hasta unas nuevas elecciones y al futuro de la reforma fiscal, parece dar alguna tregua al gobierno de Emil Boc.

Situación económica y social

La reciente publicación de los datos relativos al Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en la Unión Europea en 2009 vuelve a poner de manifiesto el desfase existente entre los países más ricos y los menos desarrollados del “club de los 27”. En efecto, según la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat), sólo 13 Estados miembros logran mantenerse por encima de la media comunitaria (el índice del 100%) mientras que los nuevos socios se sitúan por debajo del indicador global.

Más preocupante es la situación de Rumania y Bulgaria, Estados que ingresaron en la Unión Europea hace apenas tres años y que se colocan en los últimos lugares —26º y 27º respectivamente— de la lista. En ambos casos, el índice de desarrollo es inferior al 50%. Los rumanos han registrado un modesto incremento de 3 puntos del poder adquisitivo desde la adhesión a la Unión Europea. Pero este avance corre el riesgo de ser anulado, de aquí a finales de año por las drásticas medidas de austeridad impuestas por las autoridades de Bucarest para combatir el efecto de la crisis. A ese estado de cosas se suma, además, la escasa preparación de las estructuras económicas para hacer frente a los criterios de convergencia reales. Según los economistas rumanos, los sucesivos Gobiernos se han limitado a corregir los criterios nominales: inflación, déficit presupuestario y deuda pública, haciendo caso omiso de otros factores clave: la solidez de las estructuras económicas y la competitividad.

Un aspecto clave en el entramado económico es la reforma fiscal. Rumanía es el único estado de la Unión que, junto con la República Checa, mantiene un sistema tributario “a tanto alzado” que grava con un escaso 16% todas las rentas, cualquiera que sea la cuantía de las mismas. El sistema incluye asimismo notables exenciones, siendo la más significativa la de las rentas de pensiones, percibidas por alrededor de seis millones de personas.

La mayoría de los analistas explican que es esta situación la que hace imposible generar suficientes recursos al presupuesto del Estado, y la que ha colocado al gobierno ante la necesidad de optar por drásticos recortes en una primera fase y un más drástico incremento del IVA (del 19% al 25%) a continuación para poder nivelar el presupuesto y no exceder del déficit de 6´8% pactado con el FMI.

El sector tamaño del sector público y su peso específico en términos presupuestarios parece ser, pues, el principal responsable del desequilibrio presupuestario. Sin embargo, hay opiniones (incluso de destacados funcionarios del FMI) que esto no es así, sino que el problema está en el magro volumen de ingresos que es capaz de recaudar el Estado. El problema no sería tanto que el Estado gaste demasiado en salarios y pensiones públicas y en ayudas sociales, sino que ingresa poco debido principalmente a la estructura del sistema fiscal, al fraude fiscal y al tamaño de la economía sumergida. Ahora bien, ante la imposibilidad de dar una solución efectiva al problema de los escasos ingresos, no queda más remedio que limitar los gastos.

Este era el planteamiento del gobierno tal como lo presentó al país el Presidente Basescu al anunciar el programa de recortes pactado con el FMI. La imposibilidad de seguir dicho plan recortando las rentas de las pensiones surgida a continuación, ha cambiado completamente el panorama. El gobierno se ha visto obligado a incrementar los ingresos, y ello a través de la medida más fácil de llevar a cabo, que es la del impuesto indirecto, y dentro de éste, del IVA.

Para la mayoría de los analistas, el incremento del IVA va a traer efectos añadidos a la recesión de la Economía. Si las previsiones a principios del 2010 eran de que la recuperación podría iniciarse en el segundo semestre de este año, las cifras macroeconómicas han arrojado por tierra esta previsión. El FMI modificó hace ya un mes su pronóstico, señalando que la economía rumana seguiría en recesión en un 1,5% durante todo el 2010. Otros analistas, como

X-Trade Brokers afirman que esta situación se mantendrá también en el 2011, y que "el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido afectará de forma directa al consumo e indirectamente tendrá consecuencias sobre el crédito: el aumento de la inflación por la subida del IVA puede llevar al Banco Central a aumentar el tipo de interés de referencia, lo cual complicaría aún más el acceso al crédito". Esto es lo que ha dicho el jefe de la filial de X-Trade Brokers en Rumanía, Victor Safta. Los analistas de X-Trade Brokers han añadido que la subida del IVA afectará tanto al sector público como al sector privado a través de sus consecuencias a largo plazo. La caída del consumo hará que las grandes empresas quieran reducir aún más su tamaño y despedir a personal, de este modo el efecto se convertirá en una espiral en el medio y largo plazo. En opinión de Safta, "para que el sector privado pueda convivir con la medida, ésta deberá ir acompañada por otras diseñadas para apoyar a las empresas para que puedan mitigar la subida de precios y no transferirla por completo al consumidor final". Basándose en lo anterior, los analistas de X-Trade Brokers esperan un decrecimiento económico entorno al 2% para el año 2010 y prevén que se extenderá también durante el 2011.

Lo cierto es que, una vez que el decreto incrementando el IVA del 19 al 25% se ha publicado en el "Monitorul" la responsabilidad de nivelar el presupuesto del Estado ha sido de alguna forma transferida a los ciudadanos, que verán así más reducidas aún su capacidad de consumo. Una primera consecuencia que no se ha hecho esperar ha sido la caída de la moneda nacional, el leu, que ha alcanzado en las dos últimas semanas mínimos históricos frente a su principal referencia, el euro, con una tasa de cambio de 4,3688. Nadie es capaz de anticipar hasta donde podrá depreciarse, ni siquiera si esta tendencia va a continuar. Siguiendo a la prensa rumana, algunos analistas vaticinan una caída hasta un 4,5 e incluso hasta un 5,0.

La opinión más pesimista ha sido la de Eugen Radulescu, director de un departamento del Banco Nacional, que ha manifestado la dificultad de efectuar previsiones en las actuales circunstancias, unido al hecho de que las condiciones del Acuerdo con el FMI conducen en la práctica a un potencial bloqueo de la capacidad de adoptar decisiones de política monetaria. La tasa de cambio podría reducirse hasta 5 o 6 lei por euro, aunque Radulescu ha insistido en que estas previsiones reflejan una opinión estrictamente personal, y no la oficial del Banco Central. Por su parte, el Gobernador del Banco, Mugur Isarescu, guarda silencio, y su

consejero Adrian Vasilescu ha explicado que la caída de la moneda se debió más al “shock psicológico” motivado por la brusca decisión del gobierno. Para otros analistas, el volumen de las reservas del Banco Nacional es garantía suficiente de que el Banco intervendrá, si fuera necesario, para sostener al leu. Por encima de todo, planea la sensación de insatisfacción del Banco Central, quien repetidamente ha venido advirtiendo al gobierno de la inoportunidad de incrementar los impuestos en la presente situación de recesión económica, y hay quien ha especulado con que la caída de la moneda nacional ha sido de hecho permitida por la autoridad monetaria al objeto de hacer ver al gabinete Boc lo que podría ser un escenario cierto en caso de persistir en la línea de sus recientes decisiones de política fiscal.

En otro orden de cosas, la depreciación de la moneda, si se convierte en una tendencia sostenida puede tener efectos positivos en el ámbito de las exportaciones y ayudar a consolidar el sector del automóvil como un elemento de recuperación del mercado exterior rumano. En efecto, el crecimiento de las exportaciones de automóviles Dacia está resultando uno de los pocos rasgos positivos de la actual situación económica.

En efecto, Rumania ha pasado de ser un país importador de coches a ser un país exportado. En los primeros cinco meses de 2010, la exportación de vehículos de motor de Rumanía aumentó casi un 40%, hasta 134.000 de unidades, de las cuales el 99% son coches fabricados por Dacia en Pitesti, y los restantes son los Ford Transit Connect producidos en Craiova. Según estimaciones de Ziarul Financiar, la exportación en los primeros 5 meses de 2010 superó 1.000 millón de euros, mientras que la importación se situó en torno a 360 millones de euros. Según afirma el vicepresidente de Automobile Dacia, Constantin Stroe, la exportación hacia el resto de Europa constituyó un gran apoyo para Dacia, ya que si hubiera tenido solamente producción para el mercado local Dacia habría estado abierta tan solo 5 días, y sin el programa “Rabla”, mientras habría tenido actividad tan solo 15 días laborables.

La subida en las exportaciones de Dacia en 2010 se debe al lanzamiento del modelo Duster, el primer SUV de la historia de la fábrica de Mioveni. De los 137.000 coches fabricados en Mioveni en los primeros cinco meses de ese año, el 90% se exportaron al mercado de Europa del Oeste, mientras que en el caso de los SUV se exportó casi el 95%. Una situación similar se da en el caso de Ford Rumanía, que ha exportado más del 90% de su producción, estimándose que a nivel del 2010 se mantendrá el mismo porcentaje.

Volviendo al análisis de las consecuencias del incremento de la tasa del IVA, hay que decir que la mayoría de los analistas coinciden en que el incremento de la inflación está servido, a su vez, y que ésta podrá alcanzar el 7 o el 8%. Por otra parte, si el recorte de las rentas de las pensiones tenía como consecuencia no solo reducir el gasto, sino también el déficit que supone el sistema de pensiones públicas, con la subida del IVA este último problema no sólo se mantiene, sino que sigue creciendo año tras año, ya que el número de contribuyentes se reduce y el de pensionistas crece.

Los problemas estructurales se mantienen, pues, mientras que otros, como la inflación, amenazan con perpetuarse. Este es el mayor riesgo que, según A. Vasilescu, consejero del Gobernador del Banco Central, puede aportar la subida del IVA, consolidar una tendencia de inflación al alza a medio plazo.

Los políticos, por su parte, opinan a favor y en contra de la política fiscal del gobierno. En general, ni siquiera el propio gobierno está contento con las medidas adoptadas, y las juzgan como un mal menor. La oposición, por su parte, ha sido mucho más crítica. Mircea Geoana, presidente del Senado y ex dirigente del PSD ha señalado que la contracción del consumo puede llegar a una reducción del PIB en los próximos seis meses de al menos un 1%, lo que propiciaría un enquistamiento de la recesión y un incremento muy considerable del desempleo. Según el político socialdemócrata, la reducción de los gastos del sector público podría incrementar la reducción del PIB en otro 1%.

Más alarmista, el presidente del PSD, Victor Ponta ha calificado la subida del IVA como la sentencia de muerte del sector privado. La reducción del 25% de los salarios de los funcionarios encargados de vigilar la disciplina fiscal de las empresas no tendrá otra consecuencia que incrementar su absentismo y el nivel de corrupción también crecerá.

En parte para cumplir sus compromisos con el FMI, en parte para acallar las críticas que le acusan de olvidarse de poner orden en su propia casa mientras carga el peso de la crisis sobre la población el Gobierno se ha decidido finalmente a comenzar la reestructuración de la Administración pública.

Un reciente decreto ha acordado reducir las actuales secretarías de estado de 57 a 32, a razón de un máximo de dos por cada ministerio, con la excepción de Asuntos Exteriores, Interior y Finanzas, que podrán tener tres. Igualmente, se reducen los subprefectos a uno sólo por distrito. El número de Agencias estatales sufrirán asimismo un corte severo, y sus competencias serán incorporadas a las direcciones de los ministerios.

En materia de personal, tras la amortización de unas 30.000 plazas de funcionarios obtenidas hasta ahora, el gobierno ha reconocido la necesidad de suprimir otras 70.000, sin lo cual la reducción del salario de los funcionarios que queden no podrá levantarse a principios del próximo año, tal como estaba previsto. La mayor parte de estos puestos serán en la administración local y periférica, lo que ha sido severamente criticado por varios alcaldes. El resto, lo serán de los servicios centrales de los ministerios y de las agencias gubernamentales. Para hacerse una idea, el Ministerio de Trabajo eliminará 2.200 puestos de su estructura territorial, otros 300 de sus servicios centrales (lo que supone una reducción del 19 y el 25% respectivamente de sus efectivos actuales) y otros 367 de las agencias gubernamentales que dependen del Departamento.

Otros ministerios han anunciado ya medidas similares, como el de Sanidad (1.600 puestos) o el de Justicia, que amortizará un porcentaje aun no revelado de sus efectivos, incluyendo subdirectores y divisiones enteras de sus servicios centrales. Lo cierto es que esta medida, adoptada en época de crecimiento habría permitido recolocar a los funcionarios cesantes en el sector privado. Ahora, toda esta gente ira, probablemente, al paro.

Aunque con ello las cifras macroeconómicas acaben cuadrando, lo cierto es que todo esto va a contribuir a que Rumanía continúe presentando un cuadro social en muchos aspectos más propio de un país del Tercer Mundo que de la Europa comunitaria.

La renta per cápita del país está por debajo del 40% de la media de la UE, la tasa de mortalidad infantil es de 49 fallecidos por cada 100.000 nacimientos, frente a 4 por cada 100.000 nacimientos en los países europeos más avanzados; las rumanas abortan cinco veces más que en Europa occidental, y el abandono de bebés por sus madres sigue siendo un grave problema.